



## PROYECTO NACIONAL VERSUS PODER FINANCIERO INTERNACIONAL

Andrés Asiain, Cátedra Nacional Arturo Jauretche

El acontecer económico nacional e internacional nos brinda algunas lecciones sobre la existencia de poderes que restringen el ejercicio de la democracia. A poco de un abrumador apoyo en las urnas a la profundización del modelo que dio el triunfo a Cristina Kirchner con el 54% de los votos, hemos asistido a una corrida cambiaria que buscó socavar los cimientos económicos para su realización. La aplastante victoria electoral demostró que quienes se oponen a un proyecto de crecimiento con inclusión social tienen pocas chances de triunfar en la arena política. Sin embargo, la historia nos enseña que las minorías privilegiadas no se privan de utilizar métodos poco democráticos para imponer sus intereses. Descartada la posibilidad de una intentona militar como era costumbre en décadas anteriores, y derrotada la intentona mediática, la desestabilización económica puede ser la última carta que les queda por jugar.

Existen algunos antecedentes al respecto como ser el “rodrigazo” que preparó el ambiente para el golpe de 1976 o la corrida cambiaria que terminó con el mandato de Alfonsín. En la actual coyuntura, la apuesta parece ser la fuga de divisas con la finalidad de llevar al Gobierno a tener que elegir entre una fuerte devaluación con sus negativas consecuencias de inflación y concentración de los ingresos, o un acercamiento a los mercados internacionales de crédito que termine condicionando las políticas económicas a su aprobación por “el mercado”.

Por eso es en el mercado de cambios donde se libra gran parte de la lucha por una sociedad más justa. El gobierno nacional respondió a ello obligando a las empresas petroleras y mineras a liquidar el 100% de los dólares por sus exportaciones en el mercado local, expropiando el 51% de las acciones de YPF, poniendo límites a las empresas multinacionales que se llevan sus ganancias afuera del país y restringiendo la compra de dólares por los particulares. Con estas medidas se busca preservar el control por el Estado del precio del dólar, a la vez que asegurar que los haya los suficientes dólares para sostener



las importaciones de maquinarias e insumos que requiere la producción local, de manera tal de proteger el empleo y los ingresos de la mayoría de los argentinos.

Ciertos sectores medios protestan por las dificultades de convertir a dólares sus ahorros o hacer turismo en el exterior. A ellos habría que señalarles que si el gobierno permite la libre compra de dólares y se siguen fugando los miles de millones que venían saliendo mes a mes del país, la consecuencia iba a ser una crisis económica que terminaría afectando sus propios ingresos. De esa manera ya no se preocuparían por comprar dólares para ahorrar o viajar por el exterior porque no tendrían los ingresos suficientes como para ahorrar o hacer turismo.

Si bien la presión sobre el dólar parece haber disminuido y ya se habla del fin de la corrida, cabe destacar su peligrosidad, especialmente para tomar las medidas necesarias que eviten su repetición.

La disminución de las reservas internacionales y la presión sobre el dólar intentaron colocar al Gobierno frente a la disyuntiva de una devaluación inflacionaria o un acercamiento a los mercados internacionales de crédito. La primera alternativa implica un desorden económico que desgastaría el apoyo popular al proyecto en curso. La segunda genera un mecanismo de veto por parte del mercado a la posibilidad de implementar políticas económicas favorables para las mayorías que afecten ciertos intereses. Como sabemos de nuestra propia experiencia histórica la vuelta a los mercados de deuda introduce un termómetro llamado “riesgo país”, que evalúa cualquier programa económico de acuerdo a su conveniencia para los intereses financieros internos y externos.

Ese mecanismo de subordinación de los programas económicos a los intereses financieros es el que está en su apogeo en la otrora cuna de la civilización occidental. En Europa, los intereses de la banca acreedora imponen sobre los países endeudados un único programa económico aplicado indistintamente por gobiernos de cualquier color político: el ajuste que sólo conduce al ajuste. Así la política se reduce a la gestión de un programa que nadie vota, con la consiguiente desvalorización de la democracia. Dos presidentes depuestos antes del fin de sus mandatos, gobiernos de coalición en manos de tecnócratas y hasta un proyecto de



intervención supranacional en la gestión económica pintan un escenario sombrío en el cada vez más Viejo Continente.

Volviendo a nuestra tierra, una condición indispensable para afianzar y profundizar las conquistas de producción y empleo gestadas en los últimos años es consolidar el pilar sobre el que descansan, esto es, la independencia económica. Lejos de los reduccionismos tecnocráticos que ven a la política cambiaria como la diferencia central entre el modelo neoliberal y el que comenzó a gestarse en el 2003, el elemento distintivo crucial es la ruptura de la dependencia financiera externa. La cesación de pagos y posterior quita de deuda, el derrumbe importador que secundó al desastre económico del 2002 y el posterior favorable contexto exportador, permitieron implementar una política de acumulación de reservas con desendeudamiento externo que libró a la política nacional del poder de veto de los mercados.

Ésa fue la condición necesaria para desobedecer al FMI y fijar no sólo la política de un tipo de cambio alto y estable que parece obnubilar a ciertos analistas, sino también para generar incrementos de salarios por decretos, reabrir paritarias, incrementar salarios mínimos y jubilaciones, rechazar el ALCA, ampliar el sistema de asignaciones y pensiones y ponerlo bajo administración estatal, recuperar YPF, entre tantas otras medidas que desafiaron la ortodoxia neoliberal.

Consolidar esa independencia económica es, por tanto, la condición necesaria para profundizar el modelo. Ello no sólo requiere frenar corridas circunstanciales, sino también atender a ciertos problemas estructurales como el elevado nivel de importaciones y la fuerte exportación de ganancias por parte de las empresas multinacionales que actúan en la economía local.

El elevado nivel de importaciones en relación con los ingresos, si bien tiene algún elemento coyuntural ligado a la paridad cambiaria, es mayormente la consecuencia de los grandes agujeros en la matriz productiva heredados de décadas de políticas antiindustriales que no fueron revertidos a pesar del cambio en el sesgo de la política económica de los últimos años.



La recuperación de YPF por el Estado es un primer paso para recuperar la soberanía energética y reducir las compras externas de combustibles. La sustitución de importaciones debe avanzar para reducir la diferencia entre un perfil de consumo primermundista y un aparato productivo latinoamericano, que genera ciertas averías al círculo virtuoso keynesiano de mayor consumo-mayores ventas-más inversión y empleo, que es parte central del modelo económico en curso. Gran parte del consumo, la inversión e insumos de la producción se derrama hacia el extranjero y ello genera un crecimiento muy importante en las importaciones que van acortando la distancia con las exportaciones y reduciendo, de esa manera, el ingreso de dólares por la cuenta comercial. De ahí la fuerte necesidad de políticas activas para el desarrollo industrial.

Por otro lado, el elevado nivel de extranjerización empresarial genera que el ciclo de expansión económica con sus correspondientes altas ganancias, vaya a parar en parte como remisión de utilidades y dividendos girados al exterior. La actual legislación que regula al capital foráneo ata de manos al Estado nacional para intervenir en esa dinámica y cambiarla por una que vuelva compatible el entendible interés de remitir ganancias de las multinacionales con la sustentabilidad del proceso económico en curso. La solución de esos grandes problemas estructurales es la mayor garantía para un triunfo permanente de la democracia por sobre el poder financiero trasnacional.

### **La crisis internacional y las políticas contracíclicas**

Del exterior nos llegan noticias de crisis económica. Nuevamente se habla de burbujas de deudas que explotan y terminan afectando el empleo y los ingresos de millones de trabajadores. Al respecto vale aclarar que las frecuentes burbujas especulativas no son un problema exclusivo de la baja o nula regulación de los movimientos financieros. Por el contrario, la desregulación de las finanzas y el sostenimiento de procesos especulativos son la forma en que los gestores del capitalismo moderno encuentran para posponer en el tiempo la crisis económica que nace de las inconsistencias estructurales del sistema.

La expansión de las empresas multinacionales a nivel global puso a competir a los trabajadores del mundo y socavó la capacidad de los Estados nacionales de regularlas.



Flexibilizaciones laborales, bajas de salarios, reducción de impuestos con el consiguiente desfinanciamiento del Estado Benefactor son las condiciones que impone el capital aquí y allá so pena de dejar una nación y radicarse en otra donde acepten sus imposiciones. Esas eran las políticas que se imponían en la Argentina de los noventa cuando estábamos sometidos a la dictadura de la deuda externa y los mandatos de los organismos internacionales de crédito.

Ese disciplinamiento de los pueblos permitió una fenomenal concentración de la riqueza mundial en un pequeño porcentaje de la población. Pero esa misma desigualdad es la que impide un normal desarrollo de la economía, ya que un puñado de ricos no puede consumir una producción mundial en permanente incremento por el avance técnico-productivo.

Ante esa situación, las élites han fomentado el crédito, endeudando a las familias trabajadoras para que sostengan sus niveles de consumos pese al estancamiento de sus ingresos. Pero la inconsistencia entre ingresos y deudas lleva inevitablemente a una nueva crisis, esta vez con incumplimiento de deudas privadas, que luego son absorbidas por el Estado (que termina en un incumplimiento de las deudas públicas) para restablecer las condiciones de un nuevo ciclo de endeudamiento privado.

La Argentina se desenganchó de ese sistema mundial perverso gracias a la política de desendeudamiento de Néstor y Cristina Kirchner. De esa manera, logramos recuperar el control de nuestra política económica e impulsar medidas que permitieron el crecimiento de la producción y el empleo, combinadas con la ampliación de la cobertura de las jubilaciones y asignaciones, saldando gran parte de la deuda social heredada.

Sin embargo, la crisis internacional le pega a nuestro país ya que al empobrecer el mundo genera que podamos vender al exterior menos de nuestra producción. Ello afecta algunos sectores industriales exportadores como el automotriz que después se trasladan a otros sectores como las ramas metalmecánicas que les venden insumos, entre otras.

Frente a esa coyuntura, los sectores de la derecha dicen que superar la crisis hay que devaluar la moneda nacional, congelar salarios y reducir el gasto social del gobierno. Las tres políticas apuntan a disciplinar y empobrecer a las mayorías populares. La devaluación



generaría un aumento enorme en las ganancias de los exportadores a costa de los ingresos de los argentinos que tendríamos que pagar aún más caros los alimentos que ellos, de lo contrario, venden en dólares al exterior. Congelar los salarios en un contexto en que aumenta el resto de los precios tiene el mismo resultado, un menor poder de compra de los salarios. Ambas medidas van a generar una caída del consumo que terminaría afectando la actividad económica interna. Las empresas venderían menos, empezarían a despedir gente y lejos de evitar la crisis la profundizaríamos.

Hacia el mismo lugar apunta la política de reducir el gasto público. Las políticas de ajuste terminan reduciendo los ingresos de los estatales, de los proveedores del Estado, de los que cobran asignaciones y jubilaciones generando una situación de recesión económica como la de finales de los noventa. De esa manera volvería el desempleo y los trabajadores ya no podrían pedir aumentos de salarios. Eso sólo le conviene a una pequeña minoría vinculada al negocio exportador. Para las grandes mayorías nacionales sólo significa un proyecto de desempleo, salarios de hambre y subdesarrollo.

Los caminos que conducen a profundizar el proyecto nacional y popular en la actual coyuntura son los contrarios. Es mantener el gasto estatal, las jubilaciones, las asignaciones, los planes de empleo. Es permitir que en plena crisis se negocien aumentos de salarios en partidarias y que se intervenga en los conflictos empresariales para evitar despidos de trabajadores. Es anunciar facilidades de créditos para que miles de argentinos accedan a la vivienda propia relanzando de esa manera la actividad de la construcción que crea mucho empleo y derrama en la economía populares de todo el país.

Es también reducir las importaciones negociando empresa con empresa que fabriquen en el país lo que antes traían del exterior. De esta manera se crea más trabajo en la argentina y se reduce nuestra dependencia del extranjero consolida la soberanía nacional. Es evitar las corridas cambiarias que desestabilicen la economía nacional y el control de que los dólares se utilicen para sostener la actividad económica interna y el empleo de los argentinos.